



Resolución 59/2018, de 28 de marzo, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León

Asunto: expediente CT-0068/2018/ reclamación frente a la denegación de una solicitud de información pública presentada por XXX ante el Consorcio Provincial para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de León

Primero.- Con fecha 24 de enero de 2018, tuvo entrada en la Delegación del Gobierno en Asturias una solicitud de información pública dirigida por XXX al Consorcio Provincial para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de León (GERSUL).

En el “solicito” de esta petición, referida a una reclamación presentada el día 25 de abril de 2017 por los perjuicios causados a la citada empresa, se indicaba lo siguiente:

“1º.- A conocer el estado de la tramitación de dicho procedimiento; el órgano competente para su instrucción y los actos de trámite dictados, en concreto el acuerdo de inicio del expediente, con mención del plazo máximo de resolución y el sentido del silencio administrativo que corresponda (art. 53.1.a) Ley 39/2015).

2º.- A que se nos identifique las autoridades y personal al servicio del Consorcio bajo cuya responsabilidad se tramita dicho Procedimiento (art. 53.1.b) Ley 39/2015)”.

Segundo.- Transcurrido más de un mes desde que se presentó la solicitud de información pública señalada, la misma puede entenderse desestimada de conformidad con lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Tercero.- Con fecha 19 de marzo de 2018 tuvo entrada en esta Comisión de Transparencia una reclamación presentada por XXX frente a la denegación presunta señalada en el expositivo anterior.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información



pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica.

El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.

Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma Ley establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso-administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos.

Tercero.- El art. 13 LTAIBG define la información pública como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”.



Pues bien, de la lectura del escrito dirigido por el reclamante a esta Comisión de Transparencia, se desprende que su petición no constituye propiamente una solicitud de información pública, cuya tramitación y resolución se regule en la LTAIBG, sino una denuncia a través de la cual se pone en conocimiento del Consorcio Provincial para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de León (GERSUL) la existencia de supuestas irregularidades en el procedimiento administrativo de tramitación de la reclamación presentada el día 25 de abril de 2017 requiriendo el abono de una indemnización cuantificada en 1.441.091,53€, la cual se deriva de incidencias relacionadas con una contratación administrativa.

En consecuencia, el escrito con base al cual se plantea la reclamación incorpora una petición que no tiene que ver con una solicitud de información pública, tal y como se encuentra definida ésta en el precitado artículo 13 de la LTAIBG y, de conformidad a lo establecido en dicho precepto, esta Comisión de Transparencia no resulta competente para resolver la reclamación presentada, sin perjuicio de las acciones administrativas y judiciales que puedan corresponder al reclamante y del derecho que asiste al mismo de dirigirse al Procurador del Común para presentar una queja relativa a la problemática planteada en aquella.

En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros,

RESUELVE

Primero.- Inadmitir a trámite la reclamación frente a la denegación de una solicitud de información pública presentada por XXX al Consorcio Provincial para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de León (GERSUL).

Segundo.- Notificar esta Resolución al **autor** de la reclamación.

Tercera.- Una vez realizada la notificación señalada, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 124.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 25.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), contra esta Resolución cabe



COMISIONADO DE TRANSPARENCIA
DE CASTILLA Y LEÓN

la interposición de un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (artículo 10.1 m LJCA).

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Fdo.: Javier Amoedo Conde